

EL GOBIERNO TIENE UN PLAN

Llevamos año y medio exigiéndole al gobierno que presente un plan económico y no nos damos cuenta de que ese plan ya está en marcha. Simplemente sucede que ese plan no nos gusta o que estamos esperando otra cosa. Insistentemente se le pide al presidente de la República que se comprometa personalmente con algún tipo de plan de estabilización. Pero resulta que ya lo ha hecho, y de forma muy enfática. Le ha dado un NO rotundo a una serie de proposiciones hechas por exministros de su gabinete o por otras instancias. Por fin los actuales ministros —incluyendo el superadaptable Corrales— ya van entendiendo la concepción económica del Presidente y la están tratando de implementar lo más fielmente posible.

La propuesta del pacto antiinflacionario ha arrojado más luz sobre cuál es el plan oficial. Más allá de la «poesía económica», que no ha variado sustancialmente desde aquella «carta de intención con el pueblo» de la campaña electoral, el gobierno ha sido claro en lo que NO está dispuesto a hacer. No está dispuesto, por ejemplo, a emprender un plan de ajuste ortodoxo para atacar las raíces inflacionarias. Insiste en la vía de la concertación para aplacar la inflación o en mecanismos de regulación/castigo, en caso de que no haya voluntad de concertar bajo los términos fijados por él. Como aporte al pacto, ofrece mantener anclado el tipo de cambio y hacer sus mejores esfuerzos para reducir el gasto público. Cuando Fedecámaras pone como condición para firmar el pacto que el gobierno presente un plan fiscal, monetario y cambiario, desconoce que ese plan ya está puesto sobre la mesa.

LAS CLAVES PARA ENTENDER LA POLÍTICA ECONOMICA

Para entender la estrategia económica del gobierno, hace falta considerar tres elementos, que, a mi juicio, son claves. El primero es que en este gobierno la política —con minúscula— tiene absoluta prioridad. El presidente Caldera está convencido de que su principal misión es devolverle al país la estabilidad política

y social. Piensa que su presencia al frente del Estado servirá para restituir la majestad y la decencia del poder. Pero también está consciente de que arribó al gobierno con una base política muy endeble, enfrentado al status partidista tradicional y con el solo respaldo de un conjunto aluvional y heterogéneo de fuerzas políticas. Como no puede ni quiere gobernar con los factores de poder tradicionales, necesita imperiosamente crearse una base política propia. La forma de lograrlo es ganando día a día la batalla de la opinión pública. Gobierna y decide con las encuestas de opinión en la mano. Las decisiones económicas, más que ninguna otra, también están subordinadas a este objetivo político prioritario.

Esto no sería tan preocupante, si lamentablemente nuestro pueblo no fuera víctima de una cultura económica muy deformada por efecto de varias décadas de paternalismo estatal y de rentismo petrolero. No está todavía en condiciones de discernir que la mayor parte de las medidas que supuestamente se adoptan en su favor, no son más que engaños efímeros que luego revierten en su contra en forma de inflación y de desempleo. Algo se ha avanzado en materia de cultura económica, como lo evidencia, por ejemplo, el escepticismo frente a esos aumentos generales de sueldo que son rápidamente anulados por los aumentos subsecuentes de precios. En materia de controles de precios y de cambio, sin embargo, parecería que se necesitaran unos cuantos fracasos más para entender que ése no es el camino para erradicar la inflación. Tampoco se termina de entender que la renuencia a privatizar empresas públicas nada tiene que ver con la

El Gobierno necesita imperiosamente crearse una base política propia. La forma de lograrlo es ganando día a día la batalla de la opinión pública. Gobierna y decide con las encuestas de opinión en la mano

Miguel Ignacio Purroy



El primer año y pico de gobierno ha transcurrido en medio del dilema entre un manejo «político» y un enfoque técnico-racional de la economía. Mientras este dilema no estuvo resuelto, el discurso y la actuación oficiales han sido necesariamente ambiguos.

defensa de los intereses nacionales, sino que, más bien, conduce a la quiebra del Estado.

En vez de decirle la verdad a la gente, este gobierno ha preferido montarse sobre la ola de esta cultura económica deformada. Aunque, para ser justos, no creo que haya una intención consciente de engañar. Sucede simplemente que el mismo presidente de la República y sus principales colaboradores son ellos mismos víctimas de esta cultura deformada. Tanto por pertenencia generacional como por su formación jurídicista, creen sinceramente que la economía se puede manejar con decretos y con regulaciones. Su pecado reside, más bien, en no haberse actualizado con los nuevos tiempos. Esa es una obligación de cualquiera que pretenda asumir tan alta responsabilidad pública, no importa la edad que tenga. Puede ser que Matos esté algo más actualizado, pero él es un político antes que todo.

RECUPERAR EL PODER ECONOMICO

Hay un segundo elemento de la estrategia, que también guarda estrecha relación con la precariedad de la base social y política. El gobierno se ha propuesto quebrar la base del poder económico potencialmente opositor. Necesita hacerlo para sobrevivir. Aquí se mezclan una serie de motivaciones, que van desde la simple pugna por la hegemonía del poder

hasta una profunda desconfianza hacia los dueños del capital, que tradicionalmente ha estado muy difundida en la mente de los políticos venezolanos. Esta actitud está entorpeciendo las relaciones con los inversionistas extranjeros, el proceso de privatización o el ataque de la inflación como un fenómeno que va más allá de la simple especulación de los empresarios. Hay también reticencia a instrumentar medidas de estímulo a la inversión, porque se consideran como un regalo indebido. Más que desconfianza de los inversionistas hacia el gobierno, hay recelo de este frente a los inversionistas.

Se agravó esta desconfianza dentro del actual gobierno por el hecho de que en los últimos años se había fraguado una sórdida alianza entre ciertos grupos económicos voraces, especialmente del ámbito financiero, y el establecimiento político. Aun cuando sería injusto atribuirle al gobierno del presidente Caldera una estrategia premeditada, no cabe duda de que el colapso de esa parte del sistema financiero, que más inescrupulosamente había estado cohonestando la degradación del poder político durante el período de CAP, encajaba dentro del proyecto de recuperación y adcentamiento del poder. Aunque no hubo acciones intencionales, sí hubo una buena dosis de pasividad complaciente en el derrumbe de ciertas instituciones. Otro evento decisivo en el proceso de recuperación del poder fue la implantación del control de cambio. Esa fue, y sigue siendo, una decisión eminentemente política, ya que, en cualquier parte del mundo, quien es dueño de las divisas es dueño de la economía.

Un tercer aspecto esencial que subyace a la actual estrategia económica es la convicción del Presidente y de sus colaboradores de que el pueblo ya no puede ni debe aceptar más sacrificios. Piensan también que el ensayo neoliberal del gobierno anterior es el principal causante del actual deterioro social. De esta argumentación se derivan dos cursos de acción. Primero, hay que distanciarse de cualquier política que huela a liberalismo o al período anterior. Hay verdadera

obsesión en esto. El ministro que se atreve a insinuar alguna medida en esa dirección tiene sus días contados. Y segundo, el gobierno ha decidido no adoptar ninguna medida que disminuya el bienestar de la población, ni siquiera en el corto plazo. La negativa a aumentar el precio de la gasolina o a despedir empleados públicos, por ejemplo, responde a esta convicción. Como el análisis costo-beneficio se circunscribe a un cortísimo plazo, nunca es oportuno eliminar un subsidio o sanear un ente parasitario. Siempre se maneja como último argumento el fantasma de una insurrección popular.

Detrás de esta convicción hay mucha carga ideológica —fundamentalismo del cuño opuesto—, al igual que una incompreensión de las causas del proceso de empobrecimiento que viene experimentando Venezuela desde fines de los 70. Mucho más daño causaron al bienestar de los venezolanos las irresponsables políticas populistas de las administraciones Herrera y Lusinchi, que los errores cometidos —muchos, sin lugar a duda— durante el segundo gobierno de CAP.

UN PRIMER AÑO DE AMBIGÜEDAD

El primer año y pico de gobierno ha transcurrido en medio del dilema entre un manejo «político» y un enfoque técnico-racional de la economía. Mientras este dilema no estuvo resuelto, el discurso y la actuación oficiales han sido necesariamente ambiguos. Cada vez que se implantaban controles de cambio o de precios, se aseguraba que eran medidas absolutamente temporales y de emergencia. Se invitaba a la inversión extranjera a confiar en el marco jurídico-legal venezolano, pero se suspendían las garantías constitucionales. Mientras se continuaba profesando fe en la apertura comercial, se levantaban barreras cambiarias y aran-

El gobierno se ha propuesto quebrar la base del poder económico potencialmente opositor. Necesita hacerlo para sobrevivir

celarias a las importaciones. Se anunciaba una solución definitiva al déficit fiscal, pero se mantenía intacto el aparato burocrático estatal. Al tiempo que se presupuestaban unos ingresos por privatizaciones de mil quinientos millones de dólares, se le imponían toda clase de trabas al proceso de venta de empresas del Estado.

Esta ambigüedad ha tenido un costo innecesario en términos de inflación y de recesión. En el campo de la inflación, por ejemplo, hemos estado atrapados en el peor de los mundos, ya que no se ha querido adoptar un plan de estabilización ortodoxo; pero tampoco ha habido la va-

Si el pacto no se firma o no funciona, como seguramente ocurrirá, el siguiente paso será extender la regulación de precios a todos los productos de la canasta básica de consumo. Y si todavía así no se logra detener el alza de los precios, tendrá que proceder a decretar una congelación total de precios

lentía de implantar un control de precios verdaderamente global y enérgico. La actividad económica no ha podido repuntar frente a tanta incertidumbre. Las empresas saben perfectamente cómo vivir e invertir en un ambiente de controles (ya lo hicieron durante largos años), pero no se desenvuelven bien en este vaivén de reglas.

Pero con la llegada de Luis Raúl Matos a Hacienda el panorama se ha ido clarificando. En un primer momento, Matos también se enfrentó al dilema antes mencionado. De hecho puso a trabajar de forma paralela e independiente a dos equipos técnicos en la elaboración de propuestas, uno en el BCV y otro con colaboradores de su confianza en Hacienda. El primer equipo se orientaba más hacia un esquema de ajuste económico ortodoxo, mientras que el segundo tenía una visión más política del problema. Fue esta se-

gunda orientación la que finalmente fue presentada al alto gobierno.

LO QUE NO SE QUIERE HACER

El nudo gordiano de las propuestas era el tratamiento del déficit fiscal. Si se adoptaba una solución drástica y definitiva, hubiera sido posible emprender el camino hacia una apertura de la economía y hacia el desmantelamiento de los controles de cambio y de precios en el mediano plazo. Pero ello implicaba atacar el problema fiscal no sólo por el lado de la reducción del gasto, sino también por el lado del aumento del ingreso. Para aumentar los ingresos fiscales hubiera sido necesario elevar la tasa del impuesto a las ventas (hasta 15%), aumentar el precio de la gasolina (para promediar 18 Bs./litro en el año) y devaluar el bolívar (para promediar a 215 Bs./\$ en el año). El ministro Matos sabía que estas proposiciones iban a ser rechazadas por el alto gobierno y por eso ni siquiera se tomó la molestia de presentarlas. Sólo plantearle al presidente un precio de la gasolina de 25 Bs. o una tasa de cambio de 250 a fines de año equivalía a firmar la carta de renuncia. Por otra parte, la reducción del gasto público, para que fuera sostenible, implicaba tomarse en serio el programa de privatizaciones, profundizar el proceso de descentralización de competencias y reestructurar el aparato burocrático.

La propuesta finalmente adoptada deja de lado el aumento del ingreso fiscal. La estrategia de moderación de la inflación de 1995 se basa exclusivamente en tres medidas: mantener el tipo de cambio constante, concertar/regular los precios y reducir el gasto en 300 mil millones. Esta reducción, sin embargo, deja el gasto al mismo nivel del originalmente presupuestado, ya que simplemente se están compensando los incrementos de gastos de personal y de servicio de la deuda, que habían sido subestimados en el presupuesto.

Realmente, con esta sola medida no se le está dando solución al déficit de 1995, que terminará situándose en alrededor de 6 por ciento del PIB (entre 600

y 700 mil millones de bolívares). Es cierto que se producirán ingresos adicionales por el aumento de los precios del petróleo, que pudieran pasar de 13,50 a 14,50 dólares por barril en promedio del año. Este incremento de un dólar generará cerca de 800 millones de dólares adicionales de ingresos de divisas, de los cuales aproximadamente la mitad corresponden al Fisco (70 mil millones de Bs.). Pero lo más probable es que la reducción de gastos termine siendo menor a la programada, con lo cual el déficit quedará igual.

Este enorme déficit deberá ser financiado internamente, ya que las fuentes externas están cerradas. El gobierno va a te-

Los economistas llevan un buen tiempo vaticinando desenlaces desastrosos a causa de esta política. Pero nada de eso ha sucedido.

No sería nada inverosímil que en lo que queda de año tengamos una cierta bonanza, producto de una recuperación del consumo

ner que efectuar emisiones de deuda interna por ese monto (ya han anunciado emisiones por 500 mil millones). El problema es que el mercado interno no tiene capacidad suficiente para absorber tantos títulos, a no ser que el BCV libere una buena parte de los fondos que tiene represados con los TEM (antiguos cero cupón). Eso significará, simple y llanamente, que parte de los auxilios financieros de 1994, que hasta ahora no habían entrado al circulante por obra y gracia de la política absorbente del BCV, pasarán a financiar el déficit del gobierno de 1995. Al entrar al circulante de la economía, se estaría inyectando dinero nuevo «inorgánico», con el consiguiente impacto inflacionario. Este es precisamente el riesgo de los déficits fiscales persistentes, que tarde o temprano terminan siendo financiados con dinero de alto poder inflacionario.

Los pasos del «librito» de las experiencias populistas en otras latitudes también se cumplirán aquí. Variarán únicamente los lapsos y la velocidad del deterioro social y económico.

EL PANORAMA QUE NOS ESPERA

Como los agentes económicos conocen perfectamente estos números, saben que por el lado fiscal continuarán dándose las condiciones para un clima inflacionario. Saben también que el anclaje del tipo de cambio se hará cada día más difícil de sostener y que algún día deberá procederse a un maxiajuste. Al no ser capaz de romper las expectativas inflacionarias, al gobierno no le queda más remedio que recurrir a un pacto antiinflacionario, más o menos voluntario. Y si el pacto no se firma o no funciona, como seguramente ocurrirá, el siguiente paso será extender la regulación de precios a todos los productos de la canasta básica de consumo. Y si todavía así no se logra detener el alza de los precios, tendrá que proceder a decretar una congelación total de precios y a reforzar con mayores penalidades la Ley de Protección al Consumidor. Ese es el panorama que nos espera.

Los economistas llevan un buen tiempo vaticinando desenlaces desastrosos a causa de esta política. Nadie se hubiera siquiera imaginado en junio de 1994 que un año después pudiera haberse mantenido congelada la tasa de cambio en 170. Hubieran predicho un grave desabastecimiento de bienes, una caída de las exportaciones y una insoportable presión para importar. Si alguien les hubiera dicho que el gobierno no iba a ayudar al Banco Central a esterilizar la masa de dinero de los auxilios financieros, que la tasa de interés pasiva iba a estar cuarenta puntos por debajo de la inflación o que el déficit fiscal iba a ser del 6% del PIB, hubieran augurado una hiperinflación galopante. Pero nada de eso ha sucedido.

Ahora continúan diciendo que la congelación del tipo de cambio no aguanta un mes más, que la economía se está hundiendo en una profunda recesión. Probablemente tampoco esta vez se cumplan los vaticinios. No sería nada inverosímil que en lo que queda de año tengamos una cierta bonanza, producto de una recuperación del consumo. Si a través de la congelación de precios y del tipo de cambio se logra contener la inflación en un nivel

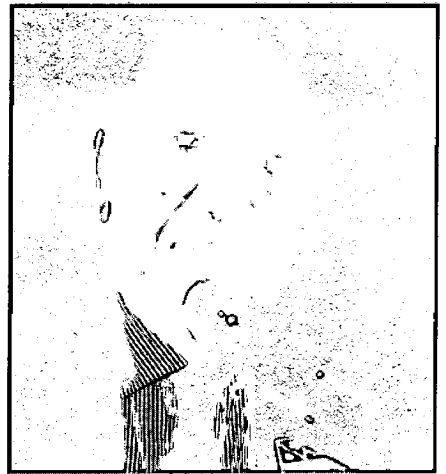
cercano al 50 por ciento y si continúan concediéndose subsidios salariales, el ingreso real de los consumidores pudiera mejorar. Las tasas de interés tan bajas, por otra parte, siguen estimulando el consumo en detrimento del ahorro. Puede ser que la economía no crezca en 1995, pero tampoco habrá recesión aguda.

LOS PASOS DEL «LIBRITO» POPULISTA

¿Como es esto posible? Hay tres factores que lo explican. En primer lugar, los controles de precios todavía no han sido aplicados en toda su fuerza. Hasta ahora sólo hemos tenido un simulacro de

La experiencia de otros países donde se han aplicado políticas populistas nos dice que la «fiesta» se termina cuando las reservas de divisas se agotan. En Venezuela estamos todavía lejos de ese punto. El flujo de ingresos petroleros está asegurado, no importa cuán irracionales sean las medidas de política interna

regulación. Apenas un 11 por ciento de la cesta de bienes usados para calcular el IPC están sometidos hoy a control. En segundo lugar, la economía venezolana tiene una importante capacidad ociosa para atender cualquier repunte del consumo. Y el tercer factor, el más importante, es que en 1995 no vamos a tener problemas de balanza de pagos. Los ingresos petroleros pueden incrementarse en cerca de 1.000 millones de dólares. Las exportaciones no petroleras pueden alcanzar un nuevo récord, tal como lo insinúan las cifras del primer cuatrimestre. Aun cuando las importaciones aumentarán levemente por efecto del dólar barato, el saldo final de la balanza de pagos podría cerrar con un moderado déficit, o incluso con superávit, y las reservas internacionales terminarían en alrededor de 11.000 millones de dólares. Un nivel todavía holgado.



La experiencia de otros países donde se han aplicado políticas populistas nos dice que la «fiesta» se termina cuando las reservas de divisas se agotan. En Venezuela estamos todavía lejos de ese punto. El flujo de ingresos petroleros está asegurado, no importa cuán irracionales sean las medidas de política interna. Ello permite que los lapsos de aplicación del populismo sean mucho más largos que en otros países. Pienso que hasta fines del año que viene no va a tener dificultad el gobierno en mantener la actual política económica. Y si se decide a aplicar coherentemente el esquema de controles y de regulaciones, bien podría continuar «pedaleando» así hasta el final del período constitucional, sin que hubiera mayores cataclismos económicos ni sociales.

Esta no es una visión en absoluto optimista o esperanzadora del futuro económico de Venezuela. Simplemente intento explicar que los plazos de aguante son mayores en nuestro país. Pero no debe haber ninguna duda de que los pasos del «librito» de las experiencias populistas en otras latitudes también se cumplirán aquí. Variarán únicamente los lapsos y la velocidad del deterioro social y económico. El aparato productivo se irá quedando rezagado respecto a nuestros vecinos por falta de inversión. Olvidará lo poco que aprendió sobre competencia. La productividad y los salarios reales seguirán cayendo. La gente terminará más pobre. La infraestructura y los servicios públicos seguirán deteriorándose. El capital humano de alto nivel buscará otros parajes y el que permanezca en el país descenderá de calidad. Y mejor no seguir enumerando. □

Miguel Ignacio Purroy es economista, hasta hace poco Director del Banco Central.